

¡LOS TRABAJADORES CUENTAN!

Perspectiva sindical sobre medios de aplicación,
rendición de cuentas y gobernanza global

Los esfuerzos de los sindicatos en pro de la Agenda para el desarrollo después de 2015 están impulsados por la firme convicción de que el desarrollo sostenible no puede lograrse sin empleos de calidad y trabajo decente, una convicción que se fundamenta en los orígenes y el propósito del conjunto del movimiento sindical de dar voz a los trabajadores y a sus familias, proteger los derechos de los trabajadores y construir un mundo justo y ecuánime.

Nuestros Gobiernos están negociando un marco para generar desarrollo sostenible en todos los rincones del planeta en un momento crucial. El trabajo precario o informal se está convirtiendo en la norma; las desigualdades amenazan la estabilidad de nuestras sociedades; los derechos humanos y sindicales están siendo vulnerados; los mercados financieros imperan con una regulación inadecuada, permitiéndose rendir cada vez menos cuentas y desvinculándose progresivamente de la economía real; el comercio está descompensado; la justicia fiscal dista mucho de ser una realidad; no dejan de aplicarse recortes a los servicios públicos; y los desafíos medioambientales, incluido el cambio climático, suponen una amenaza para la supervivencia de nuestras comunidades.

Existen demasiados casos de Gobiernos que abrogan sus responsabilidades. Todos los trabajadores y trabajadoras y sus familias deben tener acceso a una vida decente y a un trabajo digno en un entorno seguro y saludable, atendiendo al mismo tiempo a las necesidades y garantizando oportunidades para las generaciones futuras.

Solicitamos a los Gobiernos que cumplan con su obligación principal respecto al **empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos**, así como una **protección social universal**. Hemos solicitado que se asuman compromisos con el derecho humano al agua y sistemas de saneamiento y el derecho a energías sostenibles para todos, garantizando al mismo tiempo que la actividad humana respete los límites planetarios. También pedimos compromisos para garantizar el acceso a una **educación de calidad gratuita y universal** y a una **sanidad para todos**, la **igualdad de género** y la reducción de **las desigualdades en los ingresos**. Hemos puesto de relieve la importancia de la **protección del medio ambiente, y el acceso para todos a alimentos sanos y nutritivos**. Hemos expuesto nuestras demandas en un documento titulado ***Trabajar por nuestro futuro – los sindicatos en marcha por los pueblos, el planeta y la prosperidad – Visión y prioridades del Grupo***

Principal de los Trabajadores y los Sindicatos relativas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda para el desarrollo después de 2015¹.

La serie de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuesta establece los pilares de una agenda transformadora, siempre y cuando dichos objetivos estén respaldados por un marco sólido para su aplicación, seguimiento y revisión, que se fundamente en un Enfoque basado en los Derechos Humanos para el desarrollo.

Las ambiciones que se han fijado en los ODS no podrán lograrse a menos que tomemos las medidas necesarias para garantizar que todos los actores se esfuercen por cumplir los objetivos comunes establecidos en las metas y objetivos. *Esto implica desarrollar un marco en torno a los ODS que proporcione los medios adecuados, tanto financieros como no financieros, para que las metas y objetivos puedan aplicarse satisfactoriamente; establecer un sistema de rendición de cuentas en función de unas normas universales que no se limite a ser de carácter voluntario; e instituir una gobernanza a escala global que proporcione la infraestructura para responder de manera colectiva y eficaz a los retos que vayan surgiendo.*

Medios de implementación para el cumplimiento de metas y objetivos

Tras el ejercicio de acordar una serie de metas y objetivos (los Objetivos de Desarrollo Sostenible) de un Marco para después de 2015 en líneas generales completo y aprobado, es muy importante centrarse ahora en la manera de aplicar la voluntad y la determinación necesarias para cumplir efectivamente lo que se ha establecido. El movimiento sindical considera que existen notables lagunas que colmar en lo que respecta a los medios de implementación y a la financiación requerida para el logro de los ODS. En su intento por cumplir los ODS, los Gobiernos van a tener que modificar considerablemente su rumbo tanto a nivel internacional como a nivel práctico en sus respectivos países.

¹ http://www.stakeholderforum.org/fileadmin/files/SD2015_Position_Paper_Workers&TradeUnions.pdf

Abordar las cuestiones macro y sistémicas

El cambio tiene que producirse a escala macro. Los motores de nuestro sistema económico actual han seguido agrandando las desigualdades en y entre los países. Las políticas económicas y financieras internacionales han de establecerse en función del objetivo global de proporcionar justicia social y medios de vida dignos para todos y todas. La profundidad y amplitud de las metas y los objetivos incluidos en los ODS exigen un Marco para después de 2015 que cambie primordialmente la manera de funcionar e interactuar de las economías, y que aumente significativamente la importancia relativa de las políticas sociales y medioambientales progresistas.

El Marco para el desarrollo después de 2015 tiene que comprometerse con una fiscalidad efectiva de las actividades lucrativas y la acumulación de capital, con vistas a canalizar los billones de dólares en inversiones productivas, como es el desarrollo de una economía verde y centrarse en los servicios públicos; y con vistas a garantizar una “transición justa” a empleos verdes y decentes para los trabajadores y trabajadoras. Todas las prácticas de evasión y fraude fiscal, incluidos los precios de transferencia (indebidos), han de abordarse a fin de garantizar el pago de impuestos siempre que se generen ganancias y valor agregado. Aparte de los Gobiernos que ven disminuir sus ingresos, los verdaderos perdedores son los trabajadores de las multinacionales que practican esta planificación fiscal agresiva. Los trabajadores no reciben una compensación justa por sus esfuerzos y productividad, ni la participación que debería corresponderles en los beneficios de la empresa, puesto que la empresa se los embolsa antes de que puedan repartirse. La época de los auto-informes y la auto-evaluación de las instituciones financieras tiene que terminarse y debería reemplazarse por un régimen de información de cada país por separado. Además se tienen que tomar medidas para permitir a todos los países participar en igualdad de condiciones en la cooperación internacional concerniente a cuestiones fiscales; el objetivo tiene que ser un convenio tributario internacional de la ONU.

Junto con garantías de una imposición justa y progresiva, es preciso que el marco global aborde el comportamiento de los mercados financieros, por ejemplo, mediante la implementación del compromiso del G20 de “terminar con los grupos demasiado grandes

para quebrar”², tomando medidas estructurales para proteger las actividades de la banca minorista y/o comercial de la volátil banca de inversiones y el mercado bursátil. Se tienen que tomar medidas para implementar el Plan de Acción del G20/Consejo de Estabilidad Financiera (CEF) con respecto a la regulación del comercio de derivados OTC (operaciones extrabursátiles), las operaciones bancarias en la sombra y la implementación de marcos de resoluciones. Además se necesita un régimen tributario a escala mundial (Tasa sobre las Transacciones Financieras y gravámenes bancarios) aplicado a las transacciones a corto plazo a fin de evitar un comportamiento especulativo y obtener nuevas fuentes de financiación para favorecer una economía verde.

Por otra parte, los países con altos niveles de renta y competitividad están en posición de abrirse al comercio mundial, atraer inversiones y expandirse a mercados donde pueden exportar. No obstante, la apertura comercial no debe obstaculizar la capacidad de un país para agregar valor, ni atrapar al país en procesamiento de bajo costo. A los países y regiones que no están en condiciones de hacer frente a la competencia a escala mundial, debido a que las industrias y los mercados todavía no han madurado, se les aconseja erróneamente liberalizar el comercio al ritmo de los países desarrollados. Entre las medidas tomadas por países con “logros ejemplares” cabe mencionar, entre otros, el control de la inversión con requisitos de creación de empresas conjuntas, límites a la propiedad extranjera y requisitos de contenido local; utilizaron unos regímenes laxos para la protección de los derechos de autor y transferencias de tecnologías obligatorias; construyeron empresas y conglomerados estatales con el fin de crear productos competitivos; y mantuvieron un nivel arancelario más alto en comparación con los países desarrollados. Los países, incluidos los países en desarrollo, y sobre todo las regiones en desarrollo, tienen que evitar abandonar estos instrumentos nacionales de transformación estructural.

Mantener el espacio político es una cosa, hacer uso de las políticas es otra. Los países, incluidos los países en desarrollo, tienen que establecer alianzas con empresas, trabajadores/as, el sector académico y los responsables políticos a fin de definir unas

² Declaración de los líderes del G20, septiembre de 2013: https://g20.org/wp-content/uploads/2014/12/Saint_Petersburg_Declaration_ENG_0.pdf

políticas que generen ingresos públicos, que creen empleo y que fomenten las inversiones – tanto públicas como privadas – en diferentes sectores económicos. Las alianzas deberían respetar las normativas y regulaciones definidas por el sector público; la responsabilidad de la planificación, la regulación y la supervisión de las alianzas reside en el Estado. Las políticas deberían estar dirigidas a toda la actividad económica, desde la extracción y la agricultura hasta los servicios y la manufactura de valor agregado. Las políticas de transformación estructural deberían apuntar a la diversificación de la producción, aumentando el contenido intelectual de bienes y servicios (incrementando el valor agregado) y garantizando al mismo tiempo una mejora constante de la eficiencia energética así como la generación de energías sostenibles.

Las normas del trabajo se están viendo gravemente afectadas por las pautas mundiales de comercio e inversión. En consecuencia, al tratar de generar comercio justo, los tratados y acuerdos internacionales de comercio e inversión han de garantizar la aplicabilidad de las legislaciones laborales nacionales y las normas fundamentales del trabajo internacionalmente reconocidas sobre la base de unos mecanismos de seguimiento y sanción más estrictos en caso de vulneración de las normas de la OIT. Los tratados y acuerdos podrían incluir además responsabilidades claras y ejecutorias para los inversores extranjeros, que se apliquen a lo largo de las cadenas de suministro.

Los patrones de migración están también profundamente influenciados por los factores incitadores y disuasivos de la economía mundial. En este sentido, conviene subrayar que el trabajo decente permite que la migración sea una opción para los trabajadores, en lugar de verse obligados a migrar por necesidad. En la misma línea, las políticas de educación de calidad deberían complementarse con políticas que mitiguen el riesgo y las repercusiones de la fuga de cerebros. Así pues, los Gobiernos deberían evitar las políticas que fomenten o incentiven la migración a raíz de los ingresos provenientes de las remesas y deberían centrarse más bien en mejorar las oportunidades y el acceso al trabajo decente en sus correspondientes países. Por último, es fundamental reconocer y garantizar la transferibilidad de los derechos sociales de las personas. Los derechos en materia de protección social deben de guardar relación con la persona, no con el país de residencia

(transferibilidad de los fondos de previsión asignados, las pensiones, el reconocimiento de las cualificaciones educativas, etc.)

Por lo tanto, los Gobiernos tienen que tomar medidas para proteger la libertad sindical y consolidar las estructuras de diálogo/colaboración social, con vistas a establecer/ampliar la negociación colectiva, vincular los sueldos a la productividad y determinar/aumentar los salarios mínimos. El respeto y aplicación de las normas fundamentales del trabajo de la OIT debería ser un requisito mínimo para los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo, y los Estados deberían facilitar las condiciones para que los trabajadores puedan afiliarse y establecer sindicatos. Junto con la implementación de unos niveles mínimos de protección social, el fortalecimiento de las instituciones laborales aumentaría la demanda agregada sostenible y permitiría crear nuevos puestos de trabajo.

Un último punto con respecto a la macro-política es la importancia económica del crecimiento económico impulsado por los salarios, para apoyar la demanda agregada y desarrollar unas economías más fuertes y con mayor capacidad de recuperación. La evidencia es indiscutible: la participación de la mano de obra en los ingresos nacionales ha estado disminuyendo de forma constante desde bastante antes de que aparecieran los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y además no se ha limitado únicamente a los países en desarrollo, puesto que también pueden observarse disminuciones en la mayoría de los países de la OCDE. En cambio los beneficios productivos no han dejado de aumentar, según el Informe Mundial sobre Salarios 2012-2013 de la OIT³. Para el movimiento sindical, estas tendencias son un corolario natural de los esfuerzos sistemáticos y deliberados enfocados a erosionar los pilares del mercado laboral como es el salario mínimo, la negociación colectiva, las protecciones del empleo y los sindicatos. La dependencia excesiva en las exportaciones y el endeudamiento de los consumidores para el crecimiento económico, en combinación con la “financiarización” de la economía global, ha demostrado ser insostenible y ha conducido a la reciente recesión económica. Para lograr que se produzca una recuperación económica significativa, los países tienen que aumentar la demanda interna, basándose en un aumento de los salarios y una distribución

³ http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-wage-report/2012/WCMS_195244/lang--es/index.htm

más equitativa de los ingresos. Las instituciones del mercado laboral forman parte de esta solución.

Creación de sociedades más ecuánimes a través del trabajo decente, una educación de calidad y servicios públicos de calidad

Mantener un enfoque en el empleo y el trabajo decente, en todas sus dimensiones, requiere complementariedad entre las políticas económicas y sociales y los marcos normativos, para lo cual se requiere el respaldo de una inversión adecuada en educación y formación pública de calidad, el desarrollo de recursos humanos, y actividades generadoras de ingresos y trabajo decente también para las mujeres, así como la prestación de unos servicios públicos de calidad que constituyan la base de una vida digna para todos.

Para cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible de garantizar trabajo decente para todos y todas, es imprescindible que se aprueben y apliquen unos marcos de políticas nacionales exhaustivas en materia de empleo. Dichos marcos habrán de desarrollarse por medio de consultas tripartitas, y estar basados en el concepto de coherencia de las políticas para el desarrollo (en particular, trabajo decente), a fin de garantizar que las políticas macroeconómicas a favor del empleo estén respaldadas por políticas comerciales, industriales, fiscales, de infraestructura y sectoriales, así como inversiones en educación y desarrollo de capacidades.

En los marcos macro resulta necesario garantizar unas políticas e instituciones del mercado laboral sólidas y operativas. En concreto, unas políticas salariales adecuadamente diseñadas, que incluyan salarios mínimos, negociación colectiva, inspección del trabajo, servicios de empleo consolidados, prestaciones de desempleo sólidamente vinculadas a programas de protección social, medidas específicas para aumentar la participación en el mercado laboral de las mujeres y los grupos infrarrepresentados, así como medidas para ayudar a las familias con bajos ingresos a salir de la pobreza y acceder a un empleo que hayan podido elegir libremente.

Al mismo tiempo, para que se produzca un cambio transformador hacia un desarrollo sostenible, que incluya una economía verde y una transición justa para los trabajadores,

hace falta una inversión significativa y equitativa en educación, formación y aprendizaje continuo. Haciendo especial énfasis en el empeño por aumentar las oportunidades de trabajo decente para los jóvenes, se necesitarán estrategias de activación exhaustivas para facilitar la transición de la escuela al trabajo entre los jóvenes, en consonancia con la Estrategia global sobre empleo juvenil y el Llamado a la acción 2012 de la OIT.

Por último, y quizás lo más significativo, los Gobiernos tendrán que tomar medidas exhaustivas para garantizar el cumplimiento y el respeto de las normas fundamentales del trabajo de la OIT. Esto es especialmente importante en la formulación, aplicación y seguimiento de las políticas de desarrollo sostenible, y los Gobiernos tendrán que tomar medidas para mejorar el diálogo social y la participación de los interlocutores sociales, por ejemplo mediante el cumplimiento y el respeto de Convenios de la OIT relevantes sobre la inspección del trabajo (C081 y C129).

Aplicación de niveles mínimos de protección social

Todos los países deberían ser capaces, en el marco de sus respectivos presupuestos, de proporcionar seguridad de los ingresos para todos y acceso a bienes y servicios públicos esenciales, como la sanidad, la educación, la vivienda y el abastecimiento de agua y saneamiento, a través de unos niveles mínimos de protección social definidos y diseñados a escala nacional. No obstante, los niveles mínimos de protección social tendrán que adaptarse al contexto específico de cada país y contar con los conocimientos técnicos necesarios para que se implementen de manera eficaz y equitativa.

Los Gobiernos deberían ratificar y aplicar el Convenio 102 de la OIT sobre la seguridad social, y la Recomendación 202 de la OIT sobre niveles mínimos de protección social.

Se necesitan recursos adecuados para financiar los niveles mínimos de protección social. Estos pueden implementarse en todos los contextos nacionales⁴ y dentro del marco de los presupuestos existentes mediante:

⁴ La labor de investigación conjunta llevada a cabo por el FMI y la OIT indica que los niveles mínimos de protección social pueden implementarse en todos los contextos presupuestarios nacionales -

- Una reasignación del gasto público
- Un aumento de los ingresos tributarios por medio de las medidas descritas más arriba
- Una reducción de la deuda o del servicio de la deuda
- La adopción de un marco macroeconómico más flexible y la lucha contra los flujos financieros ilícitos
- Un aumento de las contribuciones a la seguridad social.

Por su parte, la comunidad internacional deberá proponerse garantizar que exista un apoyo técnico adecuado y, en determinados casos, asistencia financiera a países en desarrollo para diseñar e implementar con éxito los niveles mínimos de protección social.

Rendición de cuentas basada en las normas

El Marco para el desarrollo después de 2015 ofrece a la comunidad internacional del desarrollo una oportunidad para estimular realmente la coherencia política entre la promoción del desarrollo y los compromisos basados en las normas en materia de derechos humanos, normas del trabajo y normas medioambientales. Se han presentado diversas propuestas en este sentido, con el objetivo de basarse en mecanismos de información existentes a escala internacional, como son por ejemplo las presentaciones voluntarias de la Revisión Ministerial Anual del Consejo Económico y Social, y el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sostiene que “los Estados miembros deberían agilizar sus obligaciones internacionales en cuanto a la presentación de informes sobre derechos humanos después de 2015, velando por que sus respectivos procesos de notificación y mecanismos de rendición de cuentas a nivel nacional se refuercen mutuamente”.⁵

Es importante señalar que los mecanismos de rendición de cuentas deberán basarse en principios fundamentales como: “responsabilidad mutua”, “apropiación democrática”,

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_sec30810.pdf

⁵ OHCHR 2013 - http://www.ohchr.org/Documents/Publications/WhoWillBeAccountable_sp.pdf

“diálogo social” (es decir, la estructura tripartita de la OIT) y “alianzas inclusivas”. Así pues, el éxito de un mecanismo de rendición de cuentas dependerá de la capacidad del proceso, a todos los niveles, para reunir a diferentes actores, en igualdad de condiciones, con el fin de contribuir de forma genuina y plenamente participativa en su examen e implementación. Los Gobiernos no deben rehuir las evaluaciones justas y deberán informar con precisión de los progresos. Es la única manera de generar las medidas necesarias para que se cumplan los compromisos.

La rendición de cuentas global, en particular, es crucial para avalar una gobernanza más justa y equitativa en el desarrollo, que garantice una mejor coherencia política para el desarrollo. Los Gobiernos tienen que establecer unas metas más ambiciosas en lo que respecta a la rendición de cuentas global, presionando a favor de un sistema basado en compromisos vinculantes y realizando un seguimiento de los mecanismos, a diferencia del actual enfoque de carácter voluntario. Adicionalmente, los compromisos en el ámbito del seguimiento deben derivarse de un Enfoque basado en los Derechos Humanos y el Derecho al Desarrollo – y basarse en normas universales. Por esta razón, y en tanto que movimiento sindical, hemos sostenido repetidamente que las normas del trabajo de la OIT y otras normas relativas a los derechos humanos deben figurar en todos los aspectos de la agenda. Los mecanismos de rendición de cuentas basados en las normas y que se fundamenten en acuerdos existentes es el requisito mínimo para garantizar una rendición de cuentas global.

A nivel nacional, los procesos de evaluación deben contar con la participación plena y genuina de los actores clave en el desarrollo y en la sociedad en general. Si bien deben reflejar los compromisos globales y adaptarse a los contextos nacionales, también han de aplicar las normas universalmente acordadas, por lo que, una vez más, deberán ajustarse al derecho al desarrollo, a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y a las normas del trabajo de la OIT.

En esta óptica, el diálogo social, que agrupa a los interlocutores sociales, las organizaciones de empleadores y de trabajadores, es un buen ejemplo de cómo garantizar la apropiación de los procesos políticos a nivel nacional, y deberá informar y servir de ejemplo en cuanto a la manera de llevar a cabo los procesos de evaluación.

A nivel nacional, el diálogo social resulta fundamental para garantizar la cohesión social y la paz social a través de unos procesos de rendición de cuentas más estrictos. Como se mencionó anteriormente, existen requisitos fundamentales o prerequisites que tienen que establecerse para que el diálogo social funcione de forma efectiva, incluyendo el respeto de la libertad sindical y la negociación colectiva, de unos sindicatos y organizaciones de empleadores independientes y de la capacidad institucional de los Gobiernos para apoyar dicho proceso.

En términos de buenas prácticas existentes en materia de rendición de cuentas, es importante destacar el marco de la OIT como un ejemplo “vivo” de cómo los mecanismos de rendición de cuentas pueden funcionar a nivel global y a nivel nacional. El mecanismo de supervisión de la OIT es un mecanismo internacional de rendición de cuentas único que debería reproducirse o como mínimo conformar el mecanismo global de rendición de cuentas y los sistemas nacionales de evaluación de la agenda de desarrollo internacional.

El mecanismo de supervisión de la OIT se estableció para garantizar y apoyar a los Estados miembros de la OIT en sus esfuerzos por implementar y respetar los convenios que hayan ratificado en la ley y en la práctica (un marco legal vinculante). El sistema incluye una función de seguimiento permanente de partes interesadas que exige a los Estados miembros informar con regularidad sobre la situación relativa a los diferentes convenios (una estructura tripartita con actores reconocidos). Ofrece asimismo apoyo técnico con el fin de mejorar la implementación de los compromisos adoptados. Conviene destacar que el mecanismo de supervisión cuenta con un procedimiento de presentación de “quejas” cuyo objetivo es garantizar que los Estados miembros se responsabilicen de los convenios que ratifican. El procedimiento de presentación de “quejas” se ha utilizado satisfactoriamente en el pasado cuando los Estados miembros han sido incapaces de respetar determinados convenios (un mecanismo de presentación de quejas y de recurso).

No obstante, un enfoque holístico que defina la integración del desarrollo y los derechos humanos en un instrumento normativo y vinculante parece ser con diferencia la mejor opción. El marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y sus normas basadas en mecanismos tripartitos de rendición de cuentas constituyen un ejemplo tradicional del grado de importancia y efectividad que esto puede tener.

Gobernanza global y el derecho al desarrollo

Para que el Foro Político de Alto Nivel (FPAN) llegue a ser el órgano de gobernanza global del Marco para después de 2015, deberá basarse y observar los mismos principios que fundamentan los ODS en general, y deberá estar explícitamente vinculado al sistema de rendición de cuentas. La gobernanza global del Marco para después de 2015 deberá reafirmar el espíritu de la Declaración de 1986.

En 1986 la Declaración de la ONU sobre el Derecho al Desarrollo ya apuntaba en esta dirección. “El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales”. Además, según la Declaración, “los Estados tienen el deber de cooperar mutuamente para lograr el desarrollo y eliminar los obstáculos al desarrollo. Los Estados deben realizar sus derechos y sus deberes de modo que promuevan un nuevo orden económico internacional basado en la igualdad soberana, la interdependencia, el interés común y la cooperación entre todos los Estados, y que fomenten la observancia y el disfrute de los derechos humanos”

El deber de cooperar implica un traspaso de las responsabilidades estatales individuales (concernientes a la relación entre el Estado y el pueblo bajo su jurisdicción) hacia un concepto más amplio de obligaciones/ responsabilidad extraterritorial de los Estados más allá de sus fronteras. En consecuencia, los Estados (titulares de deberes) deben rendir cuenta de una gama más amplia de políticas exteriores, como el comercio, la deuda y las finanzas en particular, lo cual podría repercutir negativamente en otros aspectos de la agenda de desarrollo sostenible. Para ello se requiere una regulación a nivel nacional que impida la vulneración extraterritorial de los derechos humanos por parte del sector empresarial/privado.

La Declaración del Milenio ya reconocía el principio de responsabilidad compartida, requiriendo una mayor coherencia política y una mejor coordinación a escala internacional. No obstante, el déficit en cuanto a la rendición de cuentas del ODM 8 – fomentar una asociación mundial para el desarrollo – es patente. Debería mencionarse claramente que,

dado el cambio de escenario que se ha producido en la esfera del desarrollo global, la cuestión de la responsabilidad compartida no debería limitarse únicamente a entidades estatales sino que debería referirse también a los “actores no estatales”, como son las empresas privadas y las organizaciones multilaterales, cuyas acciones repercuten directamente en los procesos de desarrollo y en los derechos humanos. El concepto de responsabilidad compartida precisa una aclaración de las funciones y obligaciones de los actores no estatales, así como medios efectivos para hacerles rendir cuentas explícitamente.

Conclusión

La agenda para el desarrollo sostenible después de 2015 proporciona una oportunidad para enmarcar el futuro de las acciones de la ONU sobre el terreno en una nueva dirección – una dirección que proporcione igualdad, inclusión social, trabajo decente y medios de vida sostenibles para los trabajadores y las trabajadoras, protegiendo al mismo tiempo nuestro medio ambiente. No obstante, antes que nada, es preciso reconocer que el paradigma económico que gobierna nuestras sociedades es insostenible, para lo cual se necesita una mayor voluntad y determinación por parte de los líderes mundiales. La agenda para el desarrollo sostenible después de 2015 no podrá ser efectiva si no resulta adecuada para las trabajadoras y los trabajadores.

Los ODS han instaurado un nivel aceptable de propósito en términos de los objetivos y metas establecidas, pero el marco en el que se inscriben los ODS es tan o más importante. La situación actual en muchas partes del planeta, ya sea desde el punto de vista económico, social, medioambiental y, en última instancia, político, es absolutamente insostenible. Para que los ODS puedan cumplirse es preciso que se produzca un cambio enorme en los principios económicos y financieros que actualmente rigen las economías.